Influencia del sector Privado en la Generación de Corrupción

Camilo Alejandro Molina Carrillo

Universidad Santo Tomás

Administración de Empresas

Bogotá, 2017

Influencia del sector Privado en la Generación de Corrupción

Camilo Alejandro Molina Carrillo

camilo.molina@usantotomas.edu.co

Monografía de Compilación

Docente

Dr. Miller Rivera

Universidad Santo Tomás

Facultad de Administración de Empresas

Bogotá, 2017

Resumen

La corrupción en la alianza público-privada es uno de los detrimentos del Estado en cuestiones de desarrollo social, político, económico y seguridad en Colombia. Este trabajo comprende un estudio mediante una revisión bibliográfica que hace evidente el fenómeno de corrupción en la empresa privada. Por tanto se busca identificar mediante una revisión bibliográfica de qué forma se genera el fenómeno fundamentado en abusos sistemáticos de poder negociación y adjudicación de contratos, de la corrupción en la empresa privada y como ésta repercute en la alianza público- priva, sabiendo que el poder del estado ha sido quebrantado tanto a nivel legal como en cuestiones de desarrollo social, político, económico y de seguridad en Colombia; para así construir una base informativa que haga evidente la situación de corrupción de la empresa privada en Colombia y la divulgue, con el objetivo de darle una solución a esta problemática, ya que este fenómeno no es fácil de observar y perdura clandestinamente y no se le da, por lo tanto, el tratamiento correspondiente.

Palabras clave

Corrupción, ley, estado, desarrollo social, captura del estado, colusión, oligopolio, organización público-privada, detrimento del estado, seguridad.

Abstract

The corruption in the public-private alliance, is one of the state detrimentos in the social, political, economic and security yards of Colombia. This work comprises a study through bibliographic check, that evidence the phenomenon of corruption in the private company. That's

why, it's looking out to identify through a bibliographic check, in which ways the phenomenon of corruption in the private company is generated and how this affects in the public-private alliance, both in legal level as in affairs of social development, politic, economic and of the security of Colombia, thus, build an informative base that evidence the corruption situation in the private company of Colombia and divulge with the target of provide solve to this issue, due such phenomenon isn't easy to observe, lasts hiddenly and doesn't receives the corresponding treatment.

Keywords

Corruption, law, state, social development, state capture, theory, collusion, oligopoly, public, private, detriment of the state, security.

ÍNDICE

TABLA DE CONTENIDO	Página
Resumen.....	Iii
Palabras clave.....	Iv
Abstract	Iii
Key Words.....	Iv
Introducción.....	1-2
Justificación.....	3
1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....	4-10
1.1 Pregunta Orientadora.....	4
1.2 Hipótesis.....	4
1.3 Objetivos.....	4
1.3.1 Objetivo General.....	4
1.3.2 Objetivos Específicos.....	4-5
1.4 Antecedentes.....	5-10
2. MARCO TEÓRICO.....	11-33
2.1 Marco Referencial.....	11
2.1.1 Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011.....	11-13
2.1.2 Teoría Económica del Crimen.....	13-16
2.1.3 Captura del Estado.....	16-18
2.1.4 Aspectos Básicos de la Contratación.....	18-20
2.1.5 Tránsito de las normas, que generan hechos corruptos.....	20-22
2.1.6 Responsabilidad Fiscal.....	22-24
2.1.7 Soborno Transnacional.....	24-25
2.2 Marco Conceptual.....	25-32
2.2.1 Concepto, Causas y Efectos de la Corrupción.....	25-29
2.2.2 Colusión.....	29
2.2.3 Monopolios, Oligopolios y Clientelismo.....	29-30
2.2.4 Libre Competencia Económica.....	31
2.2.5 Relaciones Público-Privadas y Principios en las Actuaciones Administrativas..	31-32

3. IDEAS Y AUTORES.....	33-39
3.1 Comparación de Autores y Contrastación Con la Hipótesis – Marco Referencial	33-36
3.2 Comparación de Autores y Contrastación con la Hipótesis – Marco Conceptual	37-39
4. CONCLUSIONES.....	40-43
Bibliografía.....	43-48
Anexos	49-50

Introducción

La investigación que se desglosa a continuación es importante ya que ocasionalmente el sector privado se desprende una de las fuentes de corrupción más importantes e invisibles por medio del soborno hacia el sector público y político, dando como resultado el fenómeno denominado “concepto de captura del estado”, el cual se entiende como los esfuerzos para influir en la manera en que se forma dichas leyes, normas o reglamentos para su beneficio, ya que esta teoría exalta la posición política que determina una ventaja en el ámbito social y judicial; Dentro de esto se pueden observar los sobornos a los parlamentarios al “comprar sus votos para que se sancionen determinadas leyes”, sobornos a funcionarios públicos “para que aprueben normas o decretos favorables a intereses crecidos concretos o de sobornos de los jueces”.

Hasta cierto punto, la corrupción es un tema que se ve desde la escala de lo público siempre que se saca a relucir, pero es insuficiente el tratamiento que se le da a este tema desde el ámbito de lo privado, el cual realmente es el que más adelante, está generando repercusiones en lo público. La corrupción privada es una enfermedad silenciosa que sólo avisa ya cuando es demasiado tarde y las consecuencias de ésta en muchos casos es irreversible. Lamentablemente, la alianza público-privada padece de estos males y el saber de esta se hace necesario, para buscar tratamientos al detrimento que se genera.

Adicionalmente, el daño que genera la corrupción es tan grave casi como el padecimiento de una enfermedad terminal debido a las repercusiones de ésta en lo referido al ámbito del desarrollo social, político, económico, del sector de la educación, salud, seguridad, entre tantos otros.

A manera de argumento de esta investigación, se dice que la corrupción de la empresa privada en el Estado Colombiano es intrínseca consecuencia del deterioro de las leyes que regulan

la sana competencia entre las organizaciones del sector; esto, marca el fenómeno de unión entre lo privado y lo público, ocasionando la ausencia del desarrollo social, político, económico, educacional, de salud y seguridad. Por lo que el planteamiento de la hipótesis se inspira en la existencia de un Estatuto Anticorrupción, el cual se evidencia en la ley 1474 de 2011 más específicamente en el capítulo 2 el cual nos habla de las medidas administrativas en la lucha de la contratación pública y privada, como evidencia clara de que la corrupción en el sector privado es un hecho.

De modo similar, la hipótesis esta soportada por artículos de prensa y procesos legales que demuestran que la corrupción en la empresa privada es algo que existe y que no se puede negar. Llevando consigo una afectación a lo público, un ejemplo de esto es el caso mencionado en Colombia de lo ocurrido con la empresa constructora ODEBRECHT que habría pagado 4.6 millones de dólares a funcionarios públicos a cambio de contratos de infraestructura en Colombia.

De manera que, la investigación tendrá un punto de desarrollo exclusivamente teórico en el cual se tomarán textos académicos, artículos, trabajos de grado y cualquier otro documento de índole investigativo que nos brinde información acertada sobre el tema y se recopilará dando como producto final un trabajo consecuente desde el punto de vista teórico de esta situación.

Igualmente, se espera encontrar como consecuencia de esta investigación nuevas leyes que regulen esta problemática desde la perspectiva del Derecho Comparado, que busca que se obtengan nuevas ideas por medio de la legislación de otros países con la misma problemática y un nuevo tratamiento a dicha situación a nivel legal y empresarial.

Justificación

El planteamiento de la hipótesis se inspira en la existencia de un estatuto anti corrupción, el cual se evidencia en la ley 1474 de 2011; a través de este se entiende que si existe una ley que regule la corrupción en la comisión de delitos contra la administración pública, regulación y gestión de interés privado, es clara la constante problemática de corrupción que hay en el sector.

Adicionalmente, la motivación que surge por este trabajo consiste en entregar una base informativa que haga evidente la situación de corrupción de la empresa privada ya que esta no se logra observar y perdura de manera oculta en Colombia y no se le da por lo tanto el tratamiento correspondiente.

Razón por la cual, se busca adquirir nuevos argumentos jurídicos para manejar la situación de la corrupción en la empresa privada y a la vez nuevos métodos de administración para impedir la corrupción en el sector privado.

Por consiguiente, se espera que desde una visión informativa y fundamentada este escrito abra la brecha a nuevas investigaciones sobre este tema y pueda ser un pilar fundamental en cuestión de información para fundamentar futuras leyes que regulen esta situación y a la vez genere el replanteamiento del trato que se le debe dar a la empresa privada al querer ésta, licitar con el Estado. Desde una perspectiva empresarial se busca hacer un llamado de atención a los empresarios para que basen sus estatutos internos desde una mirada normativa y de buena conducta basadas en la legalidad de su actuar donde prime el sentido ético.

CAPÍTULO 1

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Pregunta Orientadora

¿CUÁLES SON LAS REPERCUSIONES DE LA CORRUPCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA EN LO PÚBLICO, EN EL ESTADO COLOMBIANO?

1.2 Hipótesis

La corrupción de la empresa privada en el Estado es consecuencia del deterioro de las leyes, la mala gestión administrativa, los casos de sobornos en la adjudicación de contratos, evasión fiscal, desfalco a los recursos del estado, enriquecimiento en el sector público, ocasionando la ausencia del desarrollo social y económico.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Identificar de qué manera se genera el fenómeno de la corrupción en la empresa privada y cómo ésta repercute en la alianza público- privada, tanto a nivel legal como en cuestiones sociales y económicas.

1.3.2 Objetivos Específicos

1.3.2.1 Conocer los parámetros legales, éticos de la corrupción en la empresa privada y su influencia en el sector público.

1.3.2.2 Analizar qué elementos conllevan el detrimento jurídico en la corrupción a nivel económico en Colombia.

1.3.2.3 Construir una base informativa que haga evidente la situación de corrupción en la empresa privada

1.3.2.4 Investigar diferentes teorías que demuestren los diversos tipos de corrupción en Colombia.

1.4 Antecedentes

A continuación, se presentan algunos trabajos de acuerdo con el parámetro temporal teniendo como base delimitadora un tiempo no menor a 3 años ni mayor a 5 años del tema de corrupción en los sectores privado y público en Colombia:

- Zuleta, A. (2015). *La corrupción su historia y sus consecuencias en Colombia* (Artículo argumentativo para obtener el título de Especialista en Derecho Sancionatorio). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.

Este artículo buscó hacer una revisión de la Corrupción, su historia y sus consecuencias en Colombia, examina el caso colombiano recurriendo a fuentes escritas o virtuales, para considerar cuál ha sido su evolución, si realmente se ha erradicado o si por el contrario ha venido creciendo a pesar de los esfuerzos de las diferentes administraciones. Una vez realizadas por su autora las consultas y consignada la información que consideró más relevante, se puede decir que en el país no ha habido éxito en cuanto a la lucha por erradicar la corrupción especialmente en las entidades oficiales, muy a pesar de los cambios que se dieron con la Constitución de 1991, donde se hizo la descentralización del gobierno, pensando que sería una solución a esta situación porque los entes de control como la Procuraduría, Contraloría y Fiscalías regionales, en conjunto con las comunidades estarían dispuestas a defender y fiscalizar los recursos que se destinaban para cada uno de los

departamentos, pero no fue así, se tiene un país donde quienes desempeñan cargos públicos se dejan permear por estrategias fraudulentas existentes gracias a la falta de compromiso de sus habitantes para fiscalizar la gestión de los funcionarios públicos. Se concluye que es indispensable endurecer las leyes que la castigan y crear programas educativos donde la ética y la moral sean incluidas de manera transversal durante el proceso de aprendizaje, para que de forma natural cada uno actúe dentro del cumplimiento de los valores humanos, con responsabilidad hacia su propia nación: Colombia. Se deduce que es un factor que no solo ha tenido repercusiones en el sector público, sino que además de esto ha llegado al sector privado de nuestras empresas en Colombia, evidenciado en la competencia desleal la búsqueda de un poder adquisitivo de una forma ilegal que el estado no puede controlar.

- Gómez, D. (2014). *Corrupción y Colusión: Asuntos del Sector Empresarial en Colombia*. (Artículo de Reflexión). Revista Prolegómenos, Bogotá.

El presente artículo es resultado de investigación dentro del proyecto “Caracterización de la colusión: Una aproximación desde la corrupción”, vinculado al grupo de Derecho Público – Categoría B de Colciencias, de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada.

La corrupción es uno de los problemas más apremiantes no sólo en Colombia sino en el mundo, por el poder que tiene de quebrantar la democracia y de deslegitimar el papel del Estado frente a los ciudadanos. Es una amenaza para la democracia y el desarrollo económico de la sociedad. Hay múltiples motivos por los cuales la eliminación de la corrupción es prioritaria dentro de la comunidad empresarial: la desconfianza entre inversores, clientes, empleados generada por escándalos éticos; las investigaciones y

procesos adelantados por casos de corrupción, entre otros. El sector empresarial, regulado por supuesto por las normas sobre la materia, les apuesta también a mecanismos voluntarios de autorregulación, en un interés por evitar los riesgos reputacionales, que vienen a sumarse a los económicos y legales. El propósito del presente documento es plantear la incidencia de la corrupción en el sector privado, su relación con la colusión, para llegar al marco regulatorio establecido tanto por el Estatuto Anticorrupción como por los compromisos internacionales adquiridos por Colombia. Finalmente, vincula la iniciativa voluntaria de Pacto Global con la participación activa de la ciudadanía.

- Molina, J. (2016). *La administración pública y el crecimiento de la corrupción en la contratación estatal*. (Especialización Finanzas y Administración Pública). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá.

La problemática de la Corrupción en la Administración pública es un factor que muy importante que, creciendo desde hace años, las ineficacias de los países en vías de desarrollo son propensos a ser más corruptos, la necesidad de algunos funcionarios públicos y la desconformidad con las entidades donde laboran, pueden ser factores que inciden a incurrir en dichos hechos delictivos.

A nivel Internacional Colombia se encuentra entre los países más corruptos y menos eficientes de Latinoamérica, es de aclarar que nuestro país desde hace tiempo ha tratado de promover y realizar controles, aunque son muy deficientes, lo que acarrea en ejecutar posibles soluciones para estos problemas que cada día más empobrecen un país, y tratar de concientizar que el erario es de todo un país.

- Sandoval, I. (2016). *Corrupción y desafíos organizacionales en un mundo de asociaciones público-privadas*. (Artículo Académico). Revista Gestión y Política Pública, México.

Este artículo desarrolla una teoría para explicar la forma en que el grado de corrupción que prevalece en las nuevas y viejas democracias responde a cambios organizacionales en la estructura para la provisión de importantes servicios públicos. Aquí se ofrece una herramienta heurística: el enfoque de la corrupción estructural (ece) que busca complejizar la comprensión de la corrupción con objeto de superar explicaciones instrumentalistas, culturalistas y mecanicistas. Los mercados son hoy nodos de poder y más allá de su “eficiencia”, son también más opacos y presentan mayores riesgos de abuso para los ciudadanos. La proliferación de asociaciones público-privadas (app) ha comenzado a romper las divisiones empíricas existentes entre lo público y lo privado, aquí se sostendrá que en lugar de atarnos a viejas categorías para explicar nuevos fenómenos es tiempo de construir marcos conceptuales nuevos que permitan avanzar en las gestas por mayor rendición de cuentas y participación ciudadana.

- Castro G. Castro. (2017) *La corrupción pública y privada: Causas, efectos y mecanismos para combatirla* (Libro académico), categoría derecho constitucional, Universidad del Rosario, Bogotá.

En el libro se desarrollan los fenómenos y mecanismos que ponen a prueba la corrupción, analizando antecedentes, causas y efectos generativos de un interés estatal que se lleva a cabo en un escenario de abuso de poderes, con el fin de obtener un beneficio -extra posicional en el sector público – Privado. La corrupción pública no es antecedente a una corrupción privada, si no que se buscó y se trasplanto al modelo publico guiado por una

sociedad. Este trabajo lo que pretende es desglosar el fenómeno llamado corrupción, siendo latente en cualquier empresa ya sea pública o privada y no siendo estigmatizada a personas concretas.

- Martínez C. (2016) *La corrupción en la administración pública*. (Artículo académico). Análisis de coyuntura, Bogotá, Colombia.

En el siguiente artículo se toman antecedentes en Colombia y se celebra el bicentenario de la independencia donde parten reflexiones de hechos históricos que en la actualidad siguen sucediendo relacionadas con el aporte que hace el estado y la construcción de una nación mejor, adoptando una ética, principios democráticos y los valores aportados a una sociedad, en particular y centrándonos en lo que integra a administración pública. El tema emancipatorio a tratar gira en torno a la corrupción pública, permitiendo analizar y enfatizar en las reflexiones en temas mucho más transversales. Partiendo de una paradoja que es que, a pesar de estar celebrando doscientos años de vida republicana, el país se encuentra sumergido en elevados índices de corrupción en la administración generando una desactualización y falta de avance en el país faltante de construcción de un orden justo y democrático. Llevándolo a un plano público privado y haciendo un enfoque empresarial, Muchos expertos indican que faltan controles adecuados y mayor vigilancia, pero, si todos nos acostumbramos a las actuaciones tramposas propias o ajenas, no habrá forma de costear el crecimiento de unas monstruosas entidades de control logrando manchar un sector privado que no se verá resuelto si los organismos de control a nivel público no empiezan a reconstruir los problemas de corrupción.

- Velásquez V. Vélez (2015) *Consideraciones sobre el delito de corrupción privada en Colombia (antecedentes, bien jurídicos y sujetos)*. Universidad Eafit, Medellín.

Colombia es un país que se ve perturbado aun por los acontecimientos que se presentan a diario con la corrupción, donde se ven afectados el ámbito jurídico público y se antecede al tráfico económico en el sector privado, donde la autoridad por parte del estado es debilitada porque el sector privado se delimita más el mero hecho de la libertad a su voluntad.

Los hechos de corrupción que actualmente Colombia enfrenta se realizan en el campo de tareas privadas en un tráfico económico y comercial.

Por lo tanto, teniendo en consideración las diferencias iniciales entre el bien jurídico y los sujetos que pueden cometer el delito de corrupción privada, su contenido, alcance y limitaciones no son ni pueden ser las mismas que la corrupción en el sector público.

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

Para abordar este trabajo de investigación, se hace necesario partir de las bases teóricas que describen los elementos esenciales para dar respuesta a la formulación del problema planteado, sobre el impacto que genera la corrupción del sector privado y público, en términos de complicidad, colaboración política y económica. Se divide en dos secciones, por una parte, el marco referencial donde se exponen las teorías y las normas que regulan en materia de corrupción y el segundo el conceptual que define los conceptos acerca de la corrupción en cada uno de sus elementos administrativos esenciales para desarrollar esta monografía de investigación con el fin de dar sentido lógico.

2.1 Marco Referencial

2.1.1 Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011.

Este acto reglamentario, fue creado con el fin de plasmar una serie de medidas administrativas para el control de la gestión pública, donde entre otros temas se generan artículos como medidas penales en la lucha contra la corrupción pública y privada, que buscan favorecer los mecanismos de prevención, investigación, entre otros.

Dentro de este documento, se establecen los artículos correspondientes a la inhabilidad para contratar a quienes incurran en actos de corrupción, financien campañas políticas o ex servidores públicos que gestionen intereses privados y que no pueden contratar con el Estado, así como, las demás medidas administrativas que especifican los grados de consanguinidad para la celebración

de contratos estatales. A partir de ahí, se estiman las medidas penales, disciplinarias y administrativas que pueden incurrir tanto en el sector público como privado, se decretan los organismos especiales para la lucha contra la corrupción en cabeza del presidente de la República, Ministerio del Interior y Justicia, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Corte suprema de Justicia, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Auditor General, presidente del Senado y Cámara de Representantes y demás entes de control. (Anticorrupción, 2011)

El Estatuto anticorrupción a su vez, determina las medidas de prevención en torno a las políticas institucionales y pedagógicas que las empresas y/o entidades deben hacer como el plan anticorrupción y la creación de la oficina atención al ciudadano, además de implementar los sistemas correspondientes al control: plan de acción, política anti trámites, revisión de los procesos y procedimientos de la entidad, divulgación de campañas, programas de pedagogía en competencias ciudadanas y todo lo concerniente a la prevención, capacitación y mecanismos de control administrativos. (Anticorrupción, 2011)

Los consultores, asesores externos e interventores, determinan las disposiciones para prevenir y combatir la corrupción, los cuales deben responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente sobre las obligaciones de los contratos que se celebren mediante licitaciones, contratos interadministrativos, contractuales, de mínima cuantía; a través del seguimiento administrativo, técnico y financiero se comprueban si existen fallas para la imposición de multas y sanciones de incumplimiento, medidas cautelares, de eficiencia y eficacia en la lucha contra la corrupción y si es necesario de rendir audiencias, notificación de las decisiones especificando cada una de las funciones correspondientes a las oficinas de representación y vigencia. (Anticorrupción, 2011)

De acuerdo a lo anterior, se observa que las medidas del Estatuto Anticorrupción son claves para realizar un seguimiento y diagnóstico administrativo que permita ejercer un eficaz control para evitar que se presenten actos de corrupción en el sistema público y privado, sin embargo, se ha llegado a tal punto de vulneración con este tema, que se imponen otros argumentos legales para socavar lo que en realidad se debe regir, esto es lo que permite que se generen actos de corrupción en el sector privado cuando se involucran en concesiones o contratos con las entidades públicas, se marginan las medidas correctivas y se continua presentando fallas en el sistema de control y cumplimiento de leyes, estatutos y decretos reglamentarios para atacar el flagelo (Ley 412 de 1997).

Esta Ley aprueba a la Convención Interamericana contra la corrupción, debido a que afecta la legitimidad de las instituciones públicas en contra de la sociedad, el orden moral, la justicia y el desarrollo integral, buscando promover y fortalecer el desarrollo, facilitar, prevenir y regular las actuaciones públicas en materia de contratación. (Ley 412, 1997)

Como punto de partida, señala los diferentes actos de corrupción como el soborno transnacional, enriquecimiento ilícito, extradición, afectaciones sobre el patrimonio del Estado. Esta ley se establece desde el orden internacional que incluye la participación de los Estados miembros de la Convención Interamericana, fue realizado como un interés de concientizar a la población sobre el grave problema de la corrupción y que la sociedad sea participe dentro del seguimiento para velar y proteger los recursos públicos. El artículo 3 de esta ley prescribe las medidas preventivas y el cumplimiento de los requisitos para realizar los procesos de contratación, recaudación, declaración de ingresos, protección de funcionarios, medidas que impidan el soborno que se estiman dentro de los diferentes actos de corrupción y/o el ofrecimiento directo o indirecto

y aprovechamiento de algún mecanismo para obtener recursos. (Convención Interamericana contra la corrupción, SF)

El objetivo la ley 412 de 1997, es el de fortalecer las medidas preventivas del sistema de control que se da en el manejo de los recursos, mediante los contratos y los actos de corrupción que se puedan presentar, en el ejercicio de asegurar la efectividad y el uso adecuado de los mismos, reflejando a su vez, el desarrollo integral que garantice la efectividad de la obligación prevista en la legislación colombiana, así como la capacitación de los funcionarios públicos para que tengan pleno conocimiento de que deben ejercer correctamente las medidas de control necesarias, a fin de evitar actos de corrupción en su gestión administrativa haciendo un respectivo seguimiento y campañas de concientización. (Ley 412, 1997).

Partiendo de un plano público hablaremos de un plano privado de donde se centra nuestro trabajo, luego de leer lo descrito por la ley 412 de 1997 también podemos concluir acerca de la afectación privada que también se encuentra en mora ante el fenómeno de la corrupción, no solo se puede hacer un señalamiento a nivel público, porque lo que guarda el sector privado en temas desleales es igual o mayor de lo que se cree, debiendo así actuar de manera colectiva o individual para optar decisiones que favorezcan y limiten el fenómeno de corrupción en el sector privado.

2.1.2 Teoría Económica del Crimen.

El economista Garay Becker autor de la teoría económica del crimen, alude que el volumen de delincuentes está influenciado por la asignación de recursos públicos y privados, definiendo la corrupción “como la conducta que se desvía de los deberes formales de un cargo público a causa de ganancias pecuniarias o de status de tipo privado” y que deriva un comportamiento que se convierte en un problema público desde la perspectiva económica. (Olivo Espín, 2017)

Becker, se refiere a los que practican la corrupción como delincuentes, dice que estos criminales actúan racionalmente para buscar maximizar su bienestar económico, es decir que son conscientes de los actos que practican, además porque conocen las sanciones y multas que se imponen en caso de ser detectados, pero ellos eligen lo que representan mayor rentabilidad así infunda en el acto ilegal.

Esta teoría que argumenta Becker dice “que el volumen del equilibrio del crimen es producido por interacción entre los delincuentes y la autoridad (mediante la aplicación de la ley) y el punto neurálgico estaba en asuntos referentes a la posibilidad de lo socialmente óptimo, la severidad, y al tipo de sanción criminal”. Para lo cual reseña cuatro focos de esta teoría

-la oferta. La persona que realiza actividades ilícitas analiza tiempos entre las legítimas e ilegítimas, con el 1% de probabilidad en ser detenido se da un mayor efecto disuasivo a las posibles sanciones, lo que significa que el delincuente estima lo que ganaría porque los efectos de ingreso y sustitución son ambiguos por lo que eligen el riesgo.

-La demanda. Los incentivos del delincuente están parcialmente controlados por los consumidores, esto hace que una demanda sea parcialmente indirecta y resultante de las demandas plasmada por ingresos marginales de la delincuencia

-Inversión pública. Al delincuente le interesa el costo esperado, sin importar el costo que genera a la economía y que además las medidas de control son costosas. Se debe encontrar un nivel donde se contraste el costo marginal e igualar a su ingreso marginal. (...) lo que significa que el delincuente estará más expuesto a un mayor número de delitos que le sean otorgados fácilmente.

-Equilibrio de mercado. Los delincuentes encuentran el óptimo para realizar sus actividades ilegales, dependiendo de la elasticidad de la oferta y a demanda de mercado.

Con lo anterior, Becker expone que al existir mayores sanciones en el derecho penal y la política criminal se debe minimizar el costo social del delito, es necesario que se desarrollen a fondo las medidas y variaciones económicas para dar explicación al modelo general del mercado que incida a verificar las variables del comportamiento del mercado legal e ilegal a fin de tomar decisiones sobre las causas delictivas y de igual manera destinar adecuadamente los recursos destinados a combatir el crimen. (Jasso Fuentes, 2015)

2.1.3 Teoría Captura del Estado

Dentro del sector privado las grandes empresas o multinacionales manejan un fenómeno conocido como captura del Estado, este funciona a través de los intereses particulares y reglas de juego presentadas por actores privados para ejercer la corrupción administrativa en lo público, esto en gran medida se debe al proceso proveniente del narcotráfico que en Colombia ha generado un amplio poder económico a partir de la corrupción.

Se define como “una forma de corrupción a gran escala que debilita la estructura económica de un país, porque distorsiona la formulación de leyes, normas, decretos, reglas y regulaciones (...), así como la acción de individuos, grupos o firmas, en el sector público y privado, que influyen en la formación de las normas y políticas del gobierno para su beneficio propio, como resultado de las provisiones ilícitas y no transparentes de beneficios privados otorgados a funcionarios públicos” (Garay Salamanca, 2008; Salcedo Albarán, 2008; Beltrán, & Guerrero, 2008)

Los esfuerzos para influir en la manera en que se forman dichas leyes, normas o reglamentos. Luís Jorge Garay lo define como “la acción de individuos, grupos o firmas, en el sector público y privado, que influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y otras

políticas de gobierno, para su propio beneficio como resultado de provisiones ilícitas y no transparentes de beneficios privados otorgados a funcionarios públicos” (Gómez Patiño, 2014)

El sector privado a través de este fenómeno de “captura del estado” puede influir en la formulación de estas normas a fin de garantizar sus propios intereses, esto funciona con sobornos, amenazas, asociación y dadas políticas; es importante que este término no cree confusión con la corrupción administrativa, ya que la “captura del estado” representa la etapa acomodativa del desarrollo normativo y regulatorio del Estado y la corrupción administrativa enfatiza más en las extorsiones, implementación y ejecución de las mismas. (Garay Salamanca, 2008; Salcedo Albarán, 2008; Beltrán, & Guerrero, 2008)

Un país puede presentar corrupción administrativa y Captura del Estado en distintas proporciones. Cuando no hay una clara diferenciación entre los intereses del Estado y los intereses privados, hay un elevado riesgo de que exista Captura del Estado y corrupción administrativa. Por lo general, la cercanía entre los intereses del Estado y los intereses privados se da en el ámbito económico. Por este motivo, los países en transición fueron los primeros casos analizados por el Banco Mundial

Un ejemplo de captura del Estado, se evidencia en el año 2000 cuando el Banco Mundial presento informes reflejando este flagelo en 23 países de Europa Oriental en los términos de captura legislativa por la compra de decisiones parlamentarias, captura del banco central a través de la manipulación y uso de los fondos estatales y la manipulación de las decisiones en intervenciones económicas, compra de las decisiones en la corte legal, financiamiento por parte de partidos políticos por agentes privados. Esto da cuenta de las transacciones ineficientes que dentro del esquema general de la administración hace referencia al actor que utiliza el soborno para

dominar partes del Estado, de manera que pueda favorecer ciertas decisiones estatales para favorecer intereses particulares. (Garay Salamanca, 2008; Salcedo Albarán, 2008; Beltrán, & Guerrero, 2008)

La administración pública en Colombia, se ha visto envuelta por “la captura del estado” haciéndose más evidente desde los 90 con la aparición de los carteles de la mafia, con el conocido Pablo Escobar, así como los grupos subversivos quienes lograron ingresar a las curules del Congreso de la República para hacer parte de las normas que allí se regulan y tomar decisiones administrativas y económicas de gran importancia para el financiamiento de sus recursos, lo que reflejo al mismo tiempo las insuficiencias de los organismos de control. (Garay Salamanca, 2008; Salcedo Albarán, 2008; Beltrán, & Guerrero, 2008)

Y desde un plano privado donde se centra el trabajo, este también ha sido utilizado para analizar una corrupción administrativa, se hace referencia también que las personas en las empresas privadas incurren a lo que son sucesos de corrupción cuando hay riesgos bajos, cuando las sanciones son leves por parte del estado, volviéndose así la corrupción como un camino eficiente y mayor obtención en nuestras empresas privadas para el sustento económico. De esta forma sirve para entender la naturaleza de la captura del estado partiendo de una base administrativa del sector privado.

La autora Susan Rose Ackerman en suiza, enmarca dentro de la teoría del enfoque económico, que la corrupción no depende solo de la magnitud del soborno si no que involucra los efectos distorsionantes que se tienen en la economía, es decir, los mercados que involucra al Estado cuando este compra bienes o servicios al sector privado siendo su proveedor limitado, así como en los pagos para evitar los costos de la regulación estatal, por tanto esta autora considera que se debe

privatizar, disminuir recursos presupuestales, eliminar el control de calidad que se contrata a la empresa privada para certificar calidad de algunos productos, de esta manera se disminuirá en gran manera los actos de corrupción. (Isaza Gómez, 2005)

En el sector privado la posibilidad se acentúa en los sectores donde su iniciativa parte por la exigencia de licencias, permisos y contratos, donde se puede hacer una mayor regulación, enfrentando barreras de entrada auspiciadas por un regulador.

2.1.4 Aspectos Básicos de la Contratación

La contratación privada, cuenta con unos parámetros específicos que se deben tener en cuenta para realizar el seguimiento y control administrativo pertinente a fin de evitar que se infiltren procesos de corrupción en su implementación, ejecución y debido proceso.

En la contratación del sector privado se debe regir las normas jurídicas que determina la ley para que los contratos que en si son acuerdo de voluntades entre dos o más partes adquieran derechos y tengan obligaciones, para ello es primordial que en principio se cumpla con los aspectos básicos en que las partes sean capaces y conscientes de lo que se va a realizar, que la actividad sea lícita y que las disposiciones contractuales no contravengan las normas de orden público. (CERLALC, 2011)

Las empresas privadas no están obligadas a contratar mediante licitación, pueden hacerlo de forma privada y directa, lo que trae consigo que exista un aprovechamiento por parte de empresas para explotar a las personas laboralmente y que está regulado dentro del Código Sustantivo del Trabajo, pero que en la mayoría de los casos no son demandadas por parte de los contratistas. Esto también evidencia un marco de corrupción por parte del empleador hacia el

empleado, que además estos aprovechan económicamente de la alianza con el sector público para obtener ganancias y lucros particulares sobre los recursos del Estado.

La contratación pública, a su vez rige normas específicas, la ley 1474 del 2011 y la ley 1150 de 2007 debe contar con los principios de publicidad y transparencia, no discriminación, relación con el objeto del contrato, criterios objetivos y mutuo reconocimiento. Y principios administrativos encaminados a la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad.

La contratación estatal es el “conjunto de normas que regula todos los procedimientos que se adelantan para que las entidades del Estado puedan realizar su proceso de abastecimiento cuando identifican su necesidad” (Politécnico, 2016). Esta se da a través de las modalidades de licitación, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, mínima cuantía. La Ley 80 de 1993 por la cual se expide el estatus general de contratación de la administración pública, menciona el proceso y las competencias en materia de contratación estatal, de igual forma para el proceso de contratación con entidades del Estado se deben tener en cuenta los tres pasos: el pre contractual que implica la presentación de estudios previos, con su respectiva planeación y el insumo para iniciar el procesos de contratación este paso termina con la adjudicación del proceso de contratación y la ley 1150 de 2007 que introduce medidas para eficiencia y transparencia. (Rincón, 2012; Galvis, 2012)

El segundo paso es el contractual, se procede a elaborar la minuta con la referencia de los estudios previos, la cual debe ser firmada por las partes implicadas en el proceso y finaliza con el paso post-contractual que es la terminación del contrato y liquidación del mismo. (Rincón, 2012; Galvis, 2012).

Siendo la contratación privada una gran fuente de empleo, que se dirime en diferentes modalidades y genera un elevado número de contratos que favorecen al sector privado y puestos de trabajo indirectos de la demanda de bienes y servicios de los recursos de la nación, es considerada a su vez uno de los principales focos de corrupción y desestabilidad económica para el país, puesto que se presentan los diferentes contrariedades de las normas que regulan el Estado a fin de satisfacer las necesidades propias del sujeto participante, incidiendo en la práctica de prebendas políticas que conllevan a la elección de gobernantes ineficientes, en donde se maneja el lucro de intereses particulares que solo satisfacen un grupo en particular formando un monopolio, con la participación de los mismos actores y se va observando un desajuste en los recursos del Estado.

2.1.5 Trásgresión de las normas, que generan hechos corruptos.

En Colombia hemos visto múltiples casos de trásgresión de las normas que han generado escándalo público por actos de corrupción, por contrataciones y manejos administrativos exagerados de los cuales se hace necesario dar referencia. Un estudio de Transparencia por Colombia muestra que el 90% de los empresarios reconocen que se ofrecen a sobornos en el entorno de los negocios como lo son aceptación de sumas de dinero por parte de los funcionarios, obstaculación de las acciones, apropiación de activos de las instituciones, entre otros, los cuales pueden llegar hasta el 17.3% de los valores de los contratos. (colombiano, 2017)

- Transmilenio calle 26: Irregularidades por el contrato Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, y la Unión Temporal Transvial que correspondía a cuatro licitaciones públicas esto afecto a la población de Bogotá en los derechos a movilidad y afectación al patrimonio público, en los evidentes actos de corrupción en la construcción de Transmilenio del tramo de la calle

26, generando pérdida de credibilidad en la administración pública y el sistema jurídico.
(Quevedo H., 2013)

Esto generó repercusiones en un ámbito social y privado habiendo afectaciones tanto a los ciudadanos en toma de transporte como a los contratistas de empresas privadas que estuvieron involucrados para tomar el proyecto.

La afectación de la movilidad durante el tramo de tres años en la ciudad de Bogotá.

- Ministerio de salud y protección social, FOSYGA, ministerio de hacienda y crédito público y caja de prevención social de comunicaciones (Caprecom): Presunta indebida financiación con proveedores, posible desvío de recursos por pagos de costas e intereses en embargos judiciales, auditorías médicas que no cumplen su objeto e indebida ejecución del objeto contractual y manejo inadecuado de recursos entregados bajo la modalidad de anticipos.
(Quevedo H., 2013)

La afectación privada se da en las empresas que cuentan con EPS siendo los colombianos quienes esperan una mejoría, por no cumplir los márgenes de solvencia exigidos por la Ley, lo que representa una población afiliada de unos 10 millones de colombianos que dicen que la situación no ha cambiado en temas de salud y el gobierno no inyecta recursos al sistema por el cierre y retrasos por parte de FOSYGA.

- Caso Odebrecht: Contratos para construir la carretera entre puerto Boyacá y Chiquinquirá, entre otros contratos suscritos por esta compañía brasileña, quien fue descubierta por manejar contratos de forma deshonestamente con sobornos a funcionarios públicos, la cual fue puesta al descubierto por Estados Unidos, reconociendo su injerencia ha pagado 3.500 millones de dólares de multa, en Colombia el soborno fue de 11 millones de dólares. Los

entes de control han realizado las revisiones respectivas del caso lo cual deja como resultado tres capturados en Colombia y decenas de personas investigadas. (Romero, 2017)

El caso de Odebrecht es más que inoportuno para el sector, pues se produce en la antesala del cierre financiero de un grupo importante de proyectos de la segunda ola y la búsqueda de recursos de algunas alianzas público-privadas. A esto hay que sumar la ‘fatiga’ en caja que ya presentan algunos bancos que están llegando a su techo en préstamos de recursos a este sector y a que apenas dos fondos de deuda han avanzado en los procesos y siguen pendientes por entrar al menos otros dos.

Más aún es un problema no solo público si no privado también donde, la corrupción sistémica que vive nuestro país corroe la misma fábrica social. Las empresas privadas corruptas suelen ofrecer charlas, consultorías y trabajos varios a miembros de la sociedad civil a cambio de su apoyo o, cuando menos, su silencio. Quienes aceptan estos pagos, a sabiendas de la reputación de las empresas privadas que los hacen, no son víctimas sino cómplices de la corrupción. Es hartamente lamentable que muchos profesionales y periodistas que han recibido pagos de Odebrecht o empresas similares no lo hagan público y, lo que es peor, opinen sobre el tema con desparpajo.

Existen muchos casos que se podrían referenciar desde las prácticas de corrupción generadas desde la concesión de contratos entre entidades privadas que con complicidad han incidido en el sector público, es necesario que el estatuto anticorrupción reglamente controles más estrictos y dictamine sanciones más drásticas frente a estos procedimientos delictivos, porque los costos que generan este tipo de controles generan un exorbitante gasto público al país, cuando existen los mecanismos de control descritos en las leyes 1474 de 2011 nombrados anteriormente, para prever

este tipo de situaciones, entonces se debe incidir en reorientar estos procesos para que la corrupción no siempre gane la batalla y los recursos de la administración pública se vean vulnerados.

Como conclusión de la trasgresión de normas que hace que se generen hechos corruptos, trae como consecuencia que las empresas que tienen prácticas honestas no cuenten con mucha participación en las licitaciones públicas, la pérdida de credibilidad hacia el Estado es grave, ya que de esta manera se genera la abstención en las urnas al momento de elegir, la ciudadanía no cree en quien está próximo a ser electo y esto resta valor a una participación activa democrática y es más fácil para los corruptos que se puedan manipular los votos y así las grandes empresas obtengan sus contratos y beneficios a favor.

2.1.6 Responsabilidad Fiscal

De acuerdo con Sainz et al., (2011). “es el conjunto de acciones administrativas adelantadas por la Contraloría con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión a esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado (...) tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de quienes realizan la gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal” (Vélez 2011; Bautista & Beltrán, 2011)

Por tanto, es responsabilidad de la gestión pública velar por los intereses que manejen fondos del Estado por parte de particulares o entidades públicas, esta función es controlada por los órganos de control, en donde se determina si se presenta daño en el patrimonio del Estado, conductas dolosas o culposas por mal manejos administrativos. La Ley 60 del 15 de agosto del

2000 “por medio de la cual establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”, está facultada para que se vigile la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto o inversión de los bienes y servicios públicos y privados, los cuales deben contar con los principios de legalidad, eficiencia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad, y valoración de costos ambientales. (Ley 610, 2000)

Sumado a ello, los demás entes de control también pueden adelantar procesos de auditoría y en caso de encontrar anomalías presentarlas ante la contraloría quien debe llevar el debido proceso, este se da mediante un informe o proceso de auditoría, a partir de la indagación preliminar y la apertura de los procesos de responsabilidad fiscal que determinan las medidas cautelares como archivo de prueba, auto de imputación y se expide un decreto de pruebas que dictamina el fallo en caso de existir responsabilidad fiscal por parte del ente investigado. (Contraloría, 2016)

La Constitución Política de Colombia en el artículo 267, 268, confiere las responsabilidades y actuaciones que debe tener la Contraloría General de la República, en donde el máximo grado que es el Contralor tiene la facultad para imponer las sanciones pecuniarias según el caso, así como recaudar los montos, presentar las pruebas pertinentes, este ejercicio de control financiero, de gestión y de resultados debe fundamentarse en eficiencia, equidad así como presentar informes anuales al congreso de la República y proyectos de ley que lleven el régimen del control fiscal, la organización y funcionamiento de la contraloría. (Constitución Política de Colombia, 1991)

2.1.7 Soborno Transnacional

Colombia se ha visto inmerso en la práctica del soborno trasnacional que se hace evidente como un paso de la corrupción, este fenómeno incide mucho en la globalización y es considerado uno de los peores actos de corrupción, de igual forma se estima que las personas que incurren en este delito y se demuestran pruebas en su contra pueden llegar a pagar multas hasta US\$40 millones, está a su vez se encuentra reglamentada dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. (Ecopetrol, 2016)

El sector privado se ha convertido en parte activa de la corrupción en Colombia. Buena parte de la corrupción en Colombia se hace con la participación del sector privado, el soborno es un tema crítico que se ha identificado como una de las actividades delictivas donde la presencia del sector privado es absolutamente evidente. Desafortunadamente la financiación privada de la política se ha convertido en una forma de corrupción, en la medida que se financia para recibir a cambio contratos y puestos, Además, del “soborno trasnacional”, donde participan varias compañías multinacionales en lavado de activos e enriquecimiento ilícito.

“Hay unos delitos que están en el orden del día que la fiscal Viviane Morales Hoyos y la contralora Sandra Morelli han llamado la atención de que no se están tratando con suficiente atención”, sostuvo.

Por eso, la politóloga de la Universidad de los Andes aseguró que varios temas de corrupción, como los del sector privado, “están pasando de agache en la legislación colombiana”.

La Ley 1778 de 2016, es la encargada de regular la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional, por tanto, cualquier servidor público que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial que ejerza la función pública o privada y que incurra en soborno trasnacional debe responder de manera integral por todos los hechos y hacer partícipe de todos los efectos de control. La Superintendencia de sociedades es la entidad en cargada de investigar y sancionar a las empresas que incurran en este delito, así como la superintendencia debe promover programas de transparencia y práctica empresarial que ayuden a disminuir y evitar actos de corrupción. Esta ley aplica para las empresas nacionales y extranjeras sin excepción, las multas pueden ser hasta 20 SMLV, inhabilidad para contratar con el Estado, publicación de la sanción por medios electrónicos, prohibición para recibir incentivos o subsidios del gobierno en un plazo de cinco años (Ley 1178 de 2016)

2.2 Marco Conceptual

Este determina las definiciones contempladas en el problema y los objetivos de investigación y términos que servirán como referencia para exponer en el trabajo.

2.2.1 Concepto, Causas y Efectos de la Corrupción.

El autor Boehm (2005), basando las definiciones de corrupción del Banco Mundial y Transparencia Nacional la definen como “el abuso del poder público con fines privados, siendo abuso toda conducta que se desvía de reglas formales e informales”. (Vélez 2011; Bautista & Beltrán, 2011)

Para los economistas el concepto de corrupción es diferente “la corrupción se refiere a actos en los que el poder del cargo público se usa para el beneficio personal de una manera que contraviene las reglas del juego”, desde el campo de la administración se enfatiza en términos

económicos, considerando la gran influencia de la ideología individualista y libertaria que conlleva al abuso de poder por parte de funcionarios públicos y políticos, en este aspecto los economistas infieren en que deben primar reformas en la administración pública para minimizar los actos de corrupción. (Hodgson & Shuxia, 2008)

Por tanto, la corrupción administrativa incide en las motivaciones personales y culturales, que conllevan al interés de acumulación de capital que se puede alcanzar por medios ilícitos por tanto priman los intereses particulares para lograr fines propios trayendo consigo una tensión entre el capitalismo y la democracia, la primera imposibilita la distribución equitativa de los recursos y la segunda no permite tomar las medidas necesarias por los abusos de poder. (Barrios, 2012; Victorino, 2012)

La Corrupción Privada. “Se refiere a comportamientos desviados de los centros de poder y de decisión de las empresas en beneficio de los administradores, empleados o personas cercanas a ellos, en detrimento de los intereses privados y colectivos de la empresa y en contra de las reglas que amparan el sistema de la libre competencia” (Jiménez & García, 2015). La corrupción privada incide en obtener intereses particulares que violan reglas específicas y debilitan la moralidad.

La Corrupción Pública, se observa en el ámbito de la participación política y el cumplimiento de favores, intereses y abusos de poder políticos, así como el manejo del narcotráfico, esta represión incide un lugar privilegiado en las relaciones y negociaciones del aparato estatal, que permite el otorgamiento de concesiones a individuos que se favorecen de grandes recompensas económicas por medio del tráfico de influencias, esto trae consigo una desestabilidad a la economía del Estado y un debilitamiento en todas las ramas de poder. (Inostroza, 2004)

Las causas de la corrupción están relacionadas a diversos factores que inciden desde el sector público al privado por el hecho del manejo de intereses y pago de favores, esto causa una inestabilidad política y económica por la ineficiencia en el sistema penal y el monopolio de los bienes y servicios. (Vélez, 2011; Bautista & Beltrán, 2011). Una de las principales causas de la corrupción es la ineficiencia asociada a un buen sistema de planeación y control tanto del sector público como privado el primero por la carencia de buenos registros de control de las oficinas internas o los entes de control, además del constante cambio de administraciones y la segunda a la aplicación de la norma siendo los mayores afectados los consumidores de bienes y servicios. (Semana, 1994)

Otra causa es la alta discrecionalidad en las decisiones de los funcionarios públicos y privados, esto en parte exime las responsabilidades generando obstáculo en las actividades propias de la entidad y/o dependencia para en medio de estas realizar movimientos que generen dispersión y poder realizar maniobras corruptivas. El monopolio es una causa relevante por el acaparamiento del poder en ciertas entidades lo cual no permite transparencia en los procesos y se presta para sobornos. (Martínez & Ramírez, 2016)

La pocas sanciones disminuyen las probabilidades de ser descubiertos, fallas en la legislación penal por falta de mecanismos de control y la búsqueda de mejores salarios los lleva a incurrir en procesos de corrupción, la baja acción moral, el objetivo de las personas es hacer dinero así deban incurrir a actos ilegales y la burocracia clientelista en donde se eligen ciertas personas con fines comunes para administrar recursos a su acomodo particular, lo que conlleva a una verdadera representación del sistema electoral y legítima gobernabilidad, estas causas traen consigo pérdida de credibilidad entre la ciudadanía al momento de elegir a sus representantes, los

demás votos son seleccionados con fines comunes o conocido como pago de cuotas políticas. (Martínez & Ramírez, 2016)

De acuerdo a Martínez y Ramírez (2006) mencionan que la corrupción es un efecto de las relaciones del Estado y de los individuos que no se dirigen hacia el bienestar colectivo, además reflejan la alteración del orden del estado de derecho, del régimen político y el sistema económico, este último puede ser la respuesta racional de los agentes económicos a la existencia de oportunidades de obtener ingresos más elevados. (Martínez & Ramírez, 2016)

La corrupción tristemente, se ha convertido en una epidemia que afecta a casi todas las entidades del Estado y de administración privada como lo son un gran número de empresas y compañías multinacionales, estas prácticas constantes que inciden en el manejo fluctuoso de los recursos del Estado, refleja la evidente poca participación en los procesos electorales por parte de la población, ya que es un efecto de manipulación para conseguir fines propios, los entes de control también han sido manipulados por el tráfico de influencias, logrando de esta manera que no actúe como lo dictamina la normas reguladoras, es este entonces el reflejo de los actos de corrupción entre el sector privado y público, proporcionalmente se evidencia que a partir de las teorías y definiciones se considera que incide en la parte administrativa así como en el derecho y todas las ramas competentes de la academia, ya que involucra aspectos de todo tipo que son de relevancia y merecen especial atención.

2.2.2 Colusión

Gómez Patiño la define como “la sinergia nociva de participantes en un proceso de selección en detrimento del derecho de terceros a participar en condiciones de igualdad” (Gómez Patiño, 2014) lo que significa que se altera el derecho a la libre competencia.

Existen un numero o grupo de empresas que acuerdan no competir entre ellas con la finalidad de aumentar sus beneficios de forma conjunta, los factores que influyen son de tipo económico jurídico y de administración en la organización empresarial, dentro de los acuerdos se establecen los precios, cantidades de producción y reparto de mercados, para este se maneja de forma abierta en donde se deja de manifiesto no competir en ciertos aspectos y encubierta cuando de forma directa no pude probarse porque no se deja ningún documento ni prueba escrita que argumente que existe colusión dentro de un grupo empresarial determinado. La colusión explícita es cuando el grupo empresarial acuerda de manera conjunta su estrategia de competitividad y la colusión tácita es cuando los competidores se comportan como si concertaran, pero no tienen relación directa. Para determinar si existe un proceso de colusión, existen pruebas como material de grabaciones, minutas, actas, documentos escritos, que refleja que si permuto un acuerdo entre las partes y se procede a la colusión. (Hermosilla Zúñiga, 2016)

2.2.3 Monopolios, Oligopolios y Clientelismo

Los monopolios en el Estado funcionan con empresas que operan durante muchos años con bajos grados de eficiencia y elevados grados de corrupción, Agostinini (2011) lo define como “el modelo opuesto a la competencia perfecta , o sea cuando la empresa sea el único vendedor del mercado por encontrarse en situaciones como control total de la oferta de un producto, posibilidad de producir a bajo costo, disposición de patentes inherentes al producto, exclusividad otorgada por el gobierno para elaborar o prestar un bien o servicio del monopolio directamente por una empresa del Estado”. (Agostinini, 2011)

El Oligopolio se trata del control que puede tener un pequeño grupo de empresas en la que se ejerce el control de la producción de un bien o servicio, este tipo de empresas pueden actuar en

actos de colusión para sus intereses propios, para definir estos grupos de oligopolios es que se determina por un número de empresas específicas que poseen recursos claves y que impide la entrada o salida de otras empresas.

El Clientelismo puede ser visto como un sistema informal de intercambios de favores entre interesados por el acceso a ciertos beneficios públicos utilizados para fines privados, así que este concepto no solo es usado para fines políticos sino para primar cualquier interés particular en beneficio de algún o de un grupo particular, que por ende conllevan a procesos de corrupción en el sector público y privado y atenta contra la representación democrática en un estado social de derecho. (Acuña Chaverri, 2009)

Sapelli (1998) lo define como “la negación de la institucionalización de sistemas, no solamente políticos sino también sociales(..) Descompone a la sociedad y a los mercados de espacios intersticiales que fragmentan a los partidos, las clases sociales y las pertinencias ideológicas. (...) aun cuando se realiza a través de aparatos sociales que han surgido originariamente para mediar e identificar intereses en forma colectiva, como los partidos, el clientelismo descompone y fragmenta esta posibilidad propia del sistema político”. (Garay Salamanca, Sálcido Albarán, Beltrán, & Guerrero, 2008)

2.2.4 Libre Competencia Económica

La libre competencia económica se ha visto afectada por los actos de corrupción en el país en donde no se tienen en cuenta los esfuerzos por parte de los empresarios en tener una participación activa en el mercado, sabiendo que de manera justa y equitativa estos cuentan con las condiciones óptimas para ofrecer sus bienes y servicios y hacer partícipe de los contratos con el estado, sin embargo existe gran rivalidad entre estos sectores ya que como se expuso

anteriormente la creación de monopolios, oligopolios y la participación del clientelismo sesga para que los particulares de manera oportuna y honesta puedan participar en los diferentes procesos de licitación y contratación estatal.

La corrupción afecta la libre competencia dado que la práctica de sobornos conlleva a malos manejos contables que se maneja de forma particular para enriquecer y deteriorar la confianza del inversionista, la Constitución Política de Colombia en sus artículos 333, 334 determina la libertad económica.

2.2.5 Relaciones Público-Privadas y Principios en las Actuaciones Administrativas

Las relaciones público-privadas han sido determinadas por la ley dando numerosas facultades a las dos, con el ánimo de apoyar las empresas y dar participación de la obtención de los recursos del estado, pero de una manera óptima y legal, sin embargo, la corrupción desde hace décadas se ha puesto en primer lugar en el marco de estas relaciones generando un control de los grandes focos de poder que se manejan desde los grandes empresarios y los convenios que tienen con el sector público. A partir de la manipulación de compra de votos, ayudas a favores políticos, reconocimiento y bonificaciones, terminan incidiendo en el sector empresarial generando grandes daños a la administración pública y aunque existen controles y medidas respectivas, no se logra enfocar a un ritmo que permita la disminución en términos de legalidad para el Estado.

El reconocimiento o desprestigio por ciertas relaciones públicas se observa en los informes y sucesos de corrupción que se han detectado durante los últimos años en Colombia, la falta de control efectivo en la planeación no permite que se pueda detener en medio de la ejecución los malos manejos y por el contrario este tipo de situaciones solo salen a la luz pública transcurridos largos años y cuando ya se ha presentado graves afectaciones en los recursos de la nación, sin dar

solución óptima ni reparación a las millonarias victimas que deja el fenómeno de la corrupción.
(Miguel González, 2013)

Las actuaciones administrativas están sujetas a procesos jurídicos, ya que permiten delimitar las interpretaciones, actuaciones y participación de las autoridades, por tanto los principios de legalidad, eficacia, celeridad, igualdad, economía, participación que se deben concertar desde el sector privado y público, están ligados a todas las orientaciones del derecho, si bien es cierto la administración confiere los aspectos en materia de organización a partir de procesos de planeación, organización, dirección y control de los procesos de una entidad, también es importante que esta exige que se den cumplimiento a las diferentes disposiciones bien sea determinadas a través del ámbito privado y más aún del público que regula estamentos de la ley más rigurosos para su cumplimiento.

De igual forma, las actuaciones administrativas tienen como principal preocupación los actos de corrupción en los sectores público, privados, no es un secreto como las diferentes organizaciones utilizan cada día diferentes mecanismos que burlan los sistemas de control para efectuar sus procesos de corrupción afectando en gran manera los recursos y patrimonio del Estado, es importante que desde lo privado se adopten más las medidas que ya están implementadas y que el sistema penal ampare unas medidas sancionatorias más rigurosas para que se puedan realizar efectivos procesos en la revisión de los actos administrativos de las empresas, entidades y sus respectivos contratos y/o concesiones.

CAPÍTULO 3

IDEAS Y AUTORES

BIBLIOGRAFÍA

3.1 Comparación de Autores y Contrastación con la Hipótesis – Marco Referencial

Título	Autor(es) y año	Descripción	Síntesis de las Conclusiones
Estatuto Anticorrupción	(Anticorrupción, 2011)	Este acto reglamentario, fue creado con el fin de plasmar una serie de medidas administrativas para la lucha contra la corrupción del sector público y privado, mediante acciones transparentes en los procesos contractuales y fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de cualquier acto irregular del sistema.	A partir de ahí, se estiman las medidas penales, disciplinarias y administrativas que pueden incurrir tanto en el sector público como privado, se decretan los organismos especiales para la lucha contra la corrupción en cabeza del presidente de la República, Ministerio del Interior y Justicia, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Corte suprema de Justicia, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Auditor General, presidente del Senado y Cámara de Representantes y demás entes de control. (Anticorrupción, 2011)
Teoría Económica del Crimen	(Olivo Espín, 2017)	El economista Garay Becker autor de la teoría económica del crimen, alude que el volumen de delincuentes está influenciado por la asignación de recursos públicos y privados, definiendo la corrupción “como la conducta que se desvía de los deberes formales de un cargo público a causa de ganancias pecuniarias o de status de tipo privado” y que deriva un comportamiento que se convierte en un problema público desde la perspectiva económica.	Becker expone que al existir mayores sanciones en el derecho penal y la política criminal se debe minimizar el costo social del delito, es necesario que se desarrollen a fondo las medidas y variaciones económicas para dar explicación al modelo general del mercado que incida a verificar las variables del comportamiento del mercado legal e ilegal a fin de tomar decisiones sobre las causas delictivas y de igual manera destinar adecuadamente los recursos destinados a combatir el crimen. (Jasso Fuentes, 2015)

Captura del Estado	(Garay Salamanca, Salcedo Albarán, Beltrán, & Guerrero, 2008)	Dentro del sector privado las grandes empresas o multinacionales manejan un fenómeno conocido como captura del Estado, este funciona a través de los intereses particulares y reglas de juego presentadas por actores privados para ejercer la corrupción administrativa en lo público, esto en gran medida se debe al proceso proveniente del narcotráfico que en Colombia ha generado un amplio poder económico a partir de la corrupción.	La administración pública en Colombia, se ha visto envuelta por “la captura del estado” haciéndose más evidente desde los 90 con la aparición de los carteles de la mafia, con el conocido Pablo Escobar, así como los grupos subversivos quienes lograron ingresar a las curules del Congreso de la República para hacer parte de las normas que allí se regulan y tomar decisiones administrativas y económicas de gran importancia para el financiamiento de sus recursos, lo que reflejo al mismo tiempo las insuficiencias de los organismos de control. (Garay Salamanca, Salcedo Albarán, Beltrán, & Guerrero, 2008)
Aspectos Básicos de la Contratación	(CERLALC, 2011)	En la contratación del sector privado se debe regir las normas jurídicas que determina la ley para que los contratos que en si son acuerdo de voluntades entre dos o más partes adquieran derechos y tengan obligaciones, para ello es primordial que en principio se cumpla con los aspectos básicos en que las partes sean capaces y conscientes de lo que se va a realizar, que la actividad sea lícita y que las disposiciones contractuales no contravengan las normas de orden público.	Siendo la contratación pública una gran fuente de empleo, que se dirime en diferentes modalidades y genera un elevado número de contratos que favorecen al sector privado y puestos de trabajo indirectos de la demanda de bienes y servicios de los recursos de la nación, es considerada a su vez uno de los principales focos de corrupción y desestabilidad económica para el país, puesto que se presentan los diferentes contrariedades de las normas que regulan el Estado a fin de satisfacer las necesidades propias del sujeto participante, incidiendo en la práctica de prebendas políticas que conllevan a la elección de gobernantes ineficientes, en donde se maneja el lucro de intereses particulares que solo satisfacen un grupo en particular formando un monopolio, con la participación de los mismos actores y se va observando un desajuste en los recursos del Estado.

Trasgresión de las normas, que generan hechos corruptos	(colombiano, 2017)	En Colombia hemos visto múltiples casos de transgresión de las normas que han generado escándalo público por actos de corrupción, por contrataciones y manejos administrativos exagerados de los cuales se hace necesario dar referencia. Un estudio de Transparencia por Colombia muestra que el 90% de los empresarios reconocen que se ofrecen a sobornos en el entorno de los negocios, los cuales pueden llegar hasta el 17.3% de los valores de los contratos.	la trasgresión de normas que hace que se generen hechos corruptos, trae como consecuencia que las empresas que tienen prácticas honestas no cuenten con mucha participación en las licitaciones públicas, la pérdida de credibilidad hacia el Estado es grave, ya que de esta manera se genera la abstención en las urnas al momento de elegir, la ciudadanía no cree en quien está próximo a ser electo y esto resta valor a una participación activa democrática y es más fácil para los corruptos que se puedan manipular los votos y así las grandes empresas obtengan sus contratos y beneficios a favor, donde la mermelada se queda con solo pocos y de qué manera está ejerciendo el pueblo la soberanía para el Estado.
Responsabilidad Fiscal	(Saiz Vélez, Mantilla Bautista, & Cárdenas Beltrán, 2011)	De acuerdo a Sainz et al., (2011). “es el conjunto de acciones administrativas adelantadas por la Contraloría con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión a esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado (...) tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de quienes realizan la gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal” (Saiz Vélez, Mantilla	Es responsabilidad de la gestión pública velar por los intereses que manejen fondos del Estado por parte de particulares o entidades públicas, esta función es vigilada por los órganos de control, en donde se determina si se presenta daño en el patrimonio del Estado, conductas dolosas o culposas por mal manejos administrativos. La Ley 60 del 15 de agosto del 2000 “por medio de la cual establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”, está facultada para que se vigile la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto o inversión de los bienes y servicios públicos, los cuales deben contar con los principios de legalidad, eficiencia, equidad,

		Bautista, & Cárdenas Beltrán, 2011)	imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad, y valoración de costos ambientales. (Ley 610, 2000)
Soborno Transnacional	(Ley 1178 de 2016)	Colombia se ha visto inmerso en la práctica del soborno trasnacional que se hace evidente como un paso de la corrupción, este fenómeno incide mucho en la globalización y es considerado uno de los peores actos de corrupción, de igual forma se estima que las personas que incurrir en este delito y se demuestran pruebas en su contra pueden llegar a pagar multas hasta US\$40 millones, está a su vez se encuentra reglamentada dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE.	La Superintendencia de sociedades es la entidad en cargada de investigar y sancionar a las empresas que incurran en este delito, así como la superintendencia debe promover programas de transparencia y práctica empresarial que ayuden a disminuir y evitar actos de corrupción. Esta ley aplica para las empresas nacionales y extranjeras sin excepción, las multas pueden ser hasta 20 SMLV, inhabilidad para contratar con el Estado, publicación de la sanción por medios electrónicos, prohibición para recibir incentivos o subsidios del gobierno en un plazo de cinco años

3.2 Comparación de Autores y Contrastación con la Hipótesis – Marco Conceptual

Título	Autor(es) y año	Descripción	Síntesis de las Conclusiones
Concepto, Causas y Efectos de la Corrupción	Boehm (2005),	El autor basando las definiciones de corrupción del Banco Mundial y Transparencia Nacional la definen como “el abuso del poder público con fines privados, siendo abuso toda conducta que se desvía de reglas formales e informales”. (Saiz Vélez, Mantilla Bautista, & Cárdenas Beltrán, 2011)	La corrupción tristemente, se ha convertido en una epidemia que afecta a casi todas las entidades del Estado y a un gran número de empresas y compañías multinacionales, estas prácticas constantes que inciden en el manejo fluctuoso de los recursos del Estado, refleja la evidente poca participación en los procesos electorales por parte de la población, ya que es un efecto de manipulación para conseguir fines propios, los entes de control también han sido manipulados por el tráfico de influencias, logrando de esta manera que no actué como lo dictamina la normas reguladoras, es este entonces el reflejo de los actos de corrupción entre el sector privado y público, proporcionalmente se evidencia que a partir de las teorías y definiciones se considera que incide en la parte administrativa así como en el derecho y todas las ramas competentes de la academia, ya que involucra aspectos de todo tipo que son de relevancia y merecen especial atención.
Colusión	(Gómez Patiño, 2014)	Gómez Patiño la define como “la sinergia nociva de participantes en un proceso de selección en detrimento del derecho de terceros a participar en condiciones de igualdad” lo que significa que se altera el derecho a la libre competencia.	La colusión explícita es cuando el grupo empresarial acuerda de manera conjunta su estrategia de competitividad y la colusión tácita es cuando los competidores se comportan como si concertaran, pero no tienen relación directa. Para determinar si existe un proceso de colusión, existen pruebas como material de grabaciones, minutas, actas, documentos

			escritos, que refleja que si permuto un acuerdo entre las partes y se procede a la colusión. (Hermosilla Zúñiga, 2016)
Monopolios, Oligopolios y Clientelismo	(Agostinini, 2011)	Los monopolios en el Estado funcionan con empresas que operan durante muchos años con bajos grados de eficiencia y elevados grados de corrupción, Agostinini (2011) lo define como “el modelo opuesto a la competencia perfecta , o sea cuando la empresa sea el único vendedor del mercado por encontrarse en situaciones como control total de la oferta de un producto, posibilidad de producir a bajo costo, disposición de patentes inherentes al producto, exclusividad otorgada por el gobierno para elaborar o prestar un bien o servicio del monopolio directamente por una empresa del Estado”.	Descompone a la sociedad y a los mercados de espacios intersticiales que fragmentan a los partidos, las clases sociales y las pertinencias ideológicas. (...) aun cuando se realiza a través de aparatos sociales que han surgido originariamente para mediar e identificar intereses en forma colectiva, como los partidos, el clientelismo descompone y fragmenta esta posibilidad propia del sistema político”. (Garay Salamanca, Sálcido Albarán, Beltrán, & Guerrero, 2008)
Libre Competencia Económica	Constitución Política de Colombia (1991)	La libre competencia económica se ha visto afectada por los actos de corrupción en el país en donde no se tienen en cuenta los esfuerzos por parte de los empresarios en tener una participación activa en el mercado, sabiendo que de manera justa y equitativa estos cuentan con las condiciones óptimas para ofrecer sus bienes y servicios y hacer partícipe de los contratos con el estado, sin embargo existe gran rivalidad entre estos sectores ya que como se expuso anteriormente la creación de monopolios, oligopolios y la participación del clientelismo sesga para que los particulares de manera	La corrupción afecta la libre competencia dado que la práctica de sobornos conlleva a malos manejos contables que se maneja de forma particular para enriquecer y deteriorar la confianza del inversionista, la Constitución Política de Colombia en sus artículos 333, 334 determina la libertad económica.

		oportuna y honesta puedan participar en los diferentes procesos de licitación y contratación estatal.	
Relaciones Público-Privadas y Principios en las Actuaciones Administrativas	(Miguel González, 2013)	Las relaciones público-privadas han sido determinadas por la ley dando numerosas facultades a las dos, con el ánimo de apoyar las empresas y dar participación de la obtención de los recursos del estado, pero de una manera óptima y legal, sin embargo, la corrupción desde hace décadas se ha puesto en primer lugar en el marco de estas relaciones generando un control de los grandes focos de poder que se manejan desde los grandes empresarios y los convenios que tienen con el sector público. A partir de la manipulación de compra de votos, ayudas a favores políticos, reconocimiento y bonificaciones, terminan incidiendo en el sector empresarial generando grandes daños a la administración pública y aunque existen controles y medidas respectivas, no se logra enfocar a un ritmo que permita la disminución en términos de legalidad para el Estado.	Las actuaciones administrativas tienen como principal preocupación los actos de corrupción en los sectores público, privados, no es un secreto como las diferentes organizaciones utilizan cada día diferentes mecanismos que burlan los sistemas de control para efectuar sus procesos de corrupción afectando en gran manera los recursos y patrimonio del Estado, es importante que desde lo privado se adopten más las medidas que ya están implementadas y que el sistema penal ampare unas medidas sancionatorias más rigurosas para que se puedan realizar efectivos procesos en la revisión de los actos administrativos de las empresas, entidades y sus respectivos contratos y/o concesiones.

Conclusiones

Al ser expedida una ley que regula la corrupción del sector privado y de igual forma la regulación de gestión pública como lo es la ley 1474 de 2011, se hace evidente la problemática de corrupción. Siendo esta un hecho que se busca combatir desde una posición normativa, pero lastimosamente fenómenos como la Captura del Estado, que es “una forma de corrupción a gran escala” debilita la estructura económica de un país, porque distorsiona la formulación de leyes, normas, decretos, reglas y regulaciones; como también todo lo referido al delito transnacional de corrupción.

Factores estos, que hacen evidente que la corrupción muchas veces prime por encima de las leyes, generando como consecuencia un detrimento y ausencia en el desarrollo social, como el caso de supuestas obras civiles que pretenden sacar adelante en la ciudad y el no cumplimiento de éstas. Por ejemplo, el caso ODEBRECHT o el antecedente de Transmilenio en la calle 26 y sus correspondientes irregularidades por el contrato del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, generando pérdida de credibilidad en la Administración Pública y el Sistema Jurídico.

Por otra parte, los hechos que acompañan toda esta investigación son los que respaldan el sustento de la misma. Situaciones como la de Ministerio de salud y protección social, FOSYGA, ministerio de hacienda y crédito público y caja de prevención social de comunicaciones (Caprecom): Presunta indebida financiación con proveedores, posible desvío de recursos por pagos de costas e intereses en embargos judiciales, auditorias médicas que no cumplen su objeto e indebida ejecución del objeto contractual y manejo inadecuado de recursos entregados bajo la modalidad de anticipos. (Quevedo H., 2013)

Adicionalmente, el Transmilenio calle 26: presentó irregularidades por el contrato con el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, y la Unión Temporal Transvial que correspondía a cuatro licitaciones públicas, perturbando a la población de Bogotá en los derechos a la movilidad y afectación al patrimonio público.

En cuanto a los evidentes actos de corrupción en la construcción de Transmilenio del tramo de la calle 26, también se generó pérdida de credibilidad en la administración pública y el sistema jurídico, se concluye que las personas mayormente involucradas están siendo los bogotanos, sus derechos a la movilidad y al buen uso del patrimonio público fueron vulnerados, siendo así afectada la imagen institucional, que genera pérdida de credibilidad en la administración y su sistema jurídico.

Por último, tenemos a el Caso ODEBRECHT: Contratos para construir la carretera entre puerto Boyacá y Chiquinquirá, entre otros contratos suscritos por esta compañía brasileña, quien fue descubierta por manejar contratos de forma deshonesto con sobornos a funcionarios públicos, la cual fue puesta al descubierto por Estados Unidos, que reconociendo su injerencia pagó 3.500 millones de dólares de multa. Para el caso de Colombia, el soborno fue de 11 millones de dólares. Los entes de control han realizado las revisiones respectivas del caso, lo cual deja como resultado tres capturados en Colombia y decenas de personas investigadas.

Los hechos puestos en evidencia son el resultado de la compilación bibliográfica expuesta durante el trabajo fundamentada anteriormente. El aspecto más relevante de este proceso ha sido descubrir el cómo es ejecutada la corrupción en la empresa privada y el cómo ésta afecta a Colombia y cuáles son las consecuencias de esta afectación.

Por otra parte, dentro de las dificultades que se tuvieron que sortear, estuvo el poder encontrar información verídica que respaldara y afianzara la presente investigación, aprendido que las problemáticas de un país no son lo que nos muestran los medios de comunicación, sino la realidad misma que se tiene que padecer como ciudadanos en el Estado colombiano.

Luego, dentro de las aplicaciones que ofrece esta compilación a futuras investigaciones, se puede considerar que se asuma como una fuente primaria generadora de cambio y claridad en el replanteamiento de las leyes actuales y las estrategias del sector privado a la hora de contratar con el Estado; todo esto en pro de un cambio del alto volumen de corrupción que aqueja a la empresa privada y su manejo contractual y de cumplimiento con el estado.

Además, dentro de los aspectos a destacar como interesantes se encuentra el profundo trabajo que se hizo a nivel normativo e investigativo que maneja todo lo referido a la corrupción en la empresa privada y pública el cual sería bueno tener en cuenta a la hora de comenzar una nueva investigación donde se fundamente el mismo contexto nombrado anteriormente, permitiendo concluir de manera más estructuradas.

Finalmente, de la presente investigación se debe decir que se cumplió con el objetivo de identificar de qué forma se genera el fenómeno de la corrupción en la empresa privada y cómo esta repercute en la Alianza Público-Privada, tanto a nivel legal como en cuestiones de desarrollo social, político, económico, educacional, de salud y seguridad en Colombia, para así construir una base informativa que haga evidente la situación de corrupción de la empresa privada en Colombia y la divulgue con el objetivo de darle una solución a esta problemática, ya que este fenómeno no es fácil de observar y perdura en lo oculto y no se le da por lo tanto el tratamiento correspondiente.

Bibliografía

- Acuña C, I. (2009). *Elementos conceptuales del clientelismo Político y sus repercusiones en la democracia*. Universidad de Costa Rica , 8 (2) , 27-36. San José, Costa Rica: Revista Reflexiones. Recuperado el 27 de junio de 2017 de <http://www.redalyc.org/pdf/729/72917900002.pdf>.
- Agostinini, J. (enero-abril de 2011). *Monopolio y oligopolio: causa de las empresas cerradas en Venezuela*. Estudio de un caso en el estado Zulia. Fundación Miguel Unamuno y Jugo venezuela , 6 (18) , 46-73. Negotium, Venezuela: zuela. Estudio de un caso en el Recuperado el 28 de junio de 2017 de <http://www.redalyc.org/pdf/782/78218453004.pdf>.
- Anticorrupción, E. 1. (12 de Julio de 2011). *Estatuto Anticorrupción LEY 1474 DE 2011. EL CONGRESO DE COLOMBIA*. Recuperado el 28 de junio de 2017 de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292>.
- Barrios Dávalos, Victorino. (Mayo-agosto de 2012). *La corrupción en el ejercicio de la función pública en el Estado de México (2000-2008)*. Universidad Autónoma del Estado de México , 15 (34) , 120-137. Toluca, México: Universidad Autónoma del Estado de México Recuperado el 27 de junio de 2017 de <http://www.redalyc.org/pdf/676/67623463006.pdf>.
- Cadena Inostroza, C. (marzo-junio de 2004). *Administración pública y democracia: el proceso histórico y los obstáculos al cambio*. Universidad Autónoma del Estado de México , 11 (1) , 95-104. México: REdalcy org. Recuperado el 27 de junio de 2017 en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10411112>.
- CERLALC. (2011). *Principios básicos de la contratación*. Las letras del derecho CERLALC. Recuperado el 27 de junio de 2017 de http://www.cerlalc.org/letrasalderecho/principios_contratacion.html.

- Colombiano. (29 de Enero de 2017). *Corrupción en el sector privado*. El Colombiano . Recuperado el 29 de junio de 2017 de <http://www.elcolombiano.com/opinion/editoriales/corrupcion-en-el-sector-privado-YI5831670>.
- Constitución Política de Colombia. (1991). *Constitución política de Colombia 1991*.
- Contraloría. (2016). *La Responsabilidad Fiscal. el proceso de Responsabilidad fiscal*. Bogotá, Colombia: Contraloría General de la República. Recuperado el 27 de junio de 2017 de <http://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal>.
- Convención Interamericana contra la corrupción. (SF). Secretaria de Transparencia. Presidencia de la República, Secretaria de Transparencia Recuperado el 27 de junio de 2017 de <http://www.anticorruccion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/Convenci%C3%B3n%20Interamericana.pdf>.
- Garay Salamanca, L. J., Sálcido Albarán, E., Beltrán, I. d., & Guerrero, B. (septiembre de 2008). *La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia*. Bogotá , Colombia: Recuperado el 27 de junio de 2017 de http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_col_sc_anexo8.pdf.
- Gómez Patiño, D. P. (enero-Junio de 2014). *Corrupción y colusión: Asuntos del sector empresarial en Colombia*. Revista Prolegómenos - Derechos y Valores , XVII (33) , pp. 43 - 56,. (U. M. Granada, Ed.) Revista Prolegómenos - Derechos y Valores Recuperado el 23 de junio de 2017 de <http://www.redalyc.org/pdf/876/87631486004.pdf>.
- Hermosilla Zuñiga, F. I. (2016). *La colusión en la doctrina y la Jurisprudencia*. Universidad de Chile. SANTIAGO, Chile: Universidad de Chile Facultad de Derecho.- Recuperado el 27 de junio de 2017 de

<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/140130/La-colusi%C3%B3n-en-la-doctrina-y-la-jurisprudencia.pdf?sequence=1>.

Hodgson, G., & Shuxia, J. (2008). *La economía de la corrupción y la corrupción de la economía: una perspectiva institucionalista*. Revista de Economía Institucional - Universidad Externado de Colombia, 10 (18), 55-80. Bogotá, Colombia: REDalcy Revista de Economía Institucional. Universidad Externado de Colombia. Recuperado el 27 de junio de 2017 de <http://www.redalyc.org/pdf/419/41901803.pdf>.

Isaza Gómez, O. (2005). *Corrupción, captura del estado y privatizaciones: Tres formas ilegítimas de apropiación de lo público*. Consejo latinoamericano de ciencias sociales . REcuperadIPC, Instituto Popular de Capacitación CLACSO o el 27 de junio de 2017 de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ipc/20121206123000/corruccion.pdf>.

Jasso Fuentes, M. G. (2015). *Teoría económica del crimen*. Máster de Formación del Profesorado Universidad Complutense de Madrid . Madrid, España: REcuperado el 27 de junio de 2017 de <https://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/148/art2020.pdf>.

Jiménez Valderrama, F., & García Rodríguez, L. (Enero-Junio de 2015). *El interés jurídico protegido en el delito de corrupción privada en Colombia*. Análisis de contexto y conexiones con el derecho de la competencia desleal. IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C , IX (35) , 159-178. (e. C. Redalcy org Red de Revistas Científicas de América Latina, Ed.) México: ICI IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293242147009>.

Ley 412, d. 1. (Noviembre de 1997). Ley 412 de 1997. CONGRESO DE LA REPUBLICA . Bogotá , Colombia: Recuperado el 27 de junio de 2014 de http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0412_1997.html.

Ley 610, d. 2. (15 de Agosto de 2000). Ley 610 del 2000. Congreso de la República . Bogotá , Colombia: Congreso de la República Recuperado el 27 de junio de 2017 de <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5725>.

Martínez Cárdenas, E. E., & Ramírez Mora, J. M. (junio de 2016). *La corrupción en la contratación estatal colombiana una aproximación desde el neoinstitucionalismo*. Reflexión Política , 8 , 15, 148-162. Bucaramanga, Colombia: Redalcy org, Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recuperado el 27 de junio de 2017 de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11001512>.

Miguel González, M. I. (septiembre-diciembre de 2013). *De las relaciones públicas a los nuevos conceptos de la comunicación: problemas terminológicos*. Revista Científica Ciencias Humanas , 9 (26) , 125-142. Maracaibo, Venezuela: REvista ORBIS Recuperado el 29 de junio de 2017 de <http://www.redalyc.org/pdf/709/70928465009.pdf>.

Olivo Espín, C. B. (2017). *Análisis económico del control anticorrupción a partir del caso ecuatoriano*. MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTORA . Madrid, España: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, FACULTAD DE DERECHO, DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA IV Recuperado el 27 de junio de <http://eprints.ucm.es/40866/1/T38282.pdf>.

Politecnico. (14 de julio de 2016). *¿Qué es contratación estatal?* Politecnico GranColombiano. Bogotá, Colombia: página Politecnico GRanColombiano. Recuperado el 27 de junio de 2017 de <http://www.poli.edu.co/content/que-es-contratacion-estatal>.

Quevedo H., N. (20 de septiembre de 2013). *El Top 10 de los casos de corrupción 'ad portas' de fallo*. El espectador . Recuperado el 28 de junio de 2017 en <http://www.elspectador.com/noticias/investigacion/el-top-10-de-los-casos-de-corrupcion-ad-portas-de-fallo-articulo-447582>.

Romero, G. V. (2 de febrero de 2017). Odebrecht: *Esquema de corrupción sistemática que se propagó en América Latina*. Telesur Noticias . Noticias Telesur Recuperado el 28 de junio de 2017 de <http://www.telesurtv.net/opinion/Odebrecht-Esquema-de-corrupcion-sistematica-que-se-propago-en-America-Latina-20170202-0045.html>.

Saiz Vélez, J. E., Mantilla Bautista, S. I., & Cárdenas Beltrán, J. M. (2011). *Corrupción: una descripción del concepto y de las limitaciones metodológicas para su medición*. Recuperado el 27 de junio de 2017 de <file:///F:/ADMINISTRACION%20CORRUPCION/doc%20consulta/299-609-1-SM.pdf>.

Semana, R. (1994). *Las causas de la corrupción*. Recuperado el 26 de junio de 2017 de <http://www.semana.com/nacion/articulo/las-causas-de-la-corrupcion/23515-3> .
Villalobos Rincón, O. L., & Galvis castaño, J. J. (Noviembre de 2012). Ventajas y desventajas del procedimiento de la contratación pública mediante la Subasta Inversa en Colombia.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS . ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS Y ADMINISTRACION PÚBLICA Universidad Militar Nueva Granada. Recuperado el 27 de junio de 2017 de <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/10485/1/VillalobosRinconOmarLeonardo2013.pdf>.

Anexos

Figuras

Figura 1. Los altos niveles de corrupción que se perciben en las instituciones públicas del país mantienen a Colombia entre las naciones del mundo en donde es más latente esta amenaza. Así se desprende del ‘Índice de Percepción de Corrupción 2015’, elaborado por Transparencia Internacional, según el cual, Colombia obtuvo un puntaje de 37 sobre 100, (siendo 0 la mayor percepción de corrupción y 100 la menor). Esta calificación ubica al país en el puesto 83 entre los 168 evaluados. A nivel de las Américas, de los 26 países evaluados, Colombia se encuentra en el puesto 12 de la tabla, por debajo del puntaje promedio de la región (40) y muy por debajo de países con calificaciones aceptables como Canadá (83), Estados Unidos (76), Uruguay (74) y Chile (70). En Suramérica solo es superado por naciones como Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Paraguay y Venezuela. **Fuente:** Recuperado de Transparency.org/cpi.

Índice de percepción de la corrupción en América 2015		
Puntuación Máx. 100		Posición global Máx. 168
83	Canadá	9
76	Estados Unidos	16
74	Uruguay	21
70	Chile	23
55	Costa Rica	40
47	Cuba	56
41	Jamaica	69
39	El Salvador	72
39	Panamá	72
39	Trinidad y Tobago	72
38	Brasil	78
37	Colombia	83
36	Perú	88
36	Surinam	88
35	México	95
34	Bolivia	99
33	Rep. Dominicana	103
32	Argentina	107
32	Ecuador	107
31	Honduras	112
29	Guyana	119
28	Guatemala	123
27	Nicaragua	130
27	Paraguay	130
17	Haití	158
17	Venezuela	158

Figura 2. El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) se mide a partir de una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción efectuadas por diversas instituciones de prestigio. El IPC es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo y en 2015 utilizó fuentes de datos de instituciones independientes que se especializan en análisis sobre gobernabilidad y entorno de negocios. Para que un país sea incluido en el escalafón, deberá aparecer en al menos tres fuentes de datos del IPC. Si un país no figura en el ranking, esto se debe exclusivamente a que no existe información suficiente obtenida a través de encuestas y no supone un indicio de que no haya corrupción en el país. Los países con las mejoras más sustanciales frente a 2014 han sido Austria, la República Checa, Jordania y Kuwait. Los países que más descendieron en la clasificación fueron Brasil, Guatemala y Lesoto. **Fuente:** Recuperado de Transparency.org/cpi.